

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al borrador de Orden Ministerial relativo al Bono Social de energía eléctrica, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Igualmente cabe señalar el que en la remisión del borrador de la Orden Ministerial se menciona que actualmente el texto de la misma se encuentra en fase de audiencia pública, pero que se remite a la AEPD a efectos de su consideración preliminar.

De la misma manera es necesario mencionar que en fecha 26 de julio de 2017 por esta AEPD se ha emitido informe en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el Bono Social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, norma jurídica de la cual es desarrollo directo la Orden Ministerial sometida a consulta. Cabe reiterar en este momento el contenido de dicho informe, el cual no es necesario transcribir de nuevo.

I

El artículo 2.7 del borrador de Orden establece los documentos que habrán de acompañarse a la solicitud por quien solicite el Bono Social. Sería conveniente completar dicho epígrafe con una remisión a la necesidad de acompañar también, cuando sea procedente, el certificado de los servicios sociales a que se hace referencia en el primer párrafo del artículo 3 de la Orden, puesto que aunque del contenido de la norma en su conjunto resulta que dicho certificado ha de entregarse igualmente a la comercializadora de referencia cuando el consumidor entiende que concurren en él las circunstancias especiales que se recogen el artículo 3.3 del proyecto de Real Decreto (véase que el formulario de solicitud que se aporta al borrador de Orden como anexo, tanto en el apéndice I como en el apéndice II, requiere que para acreditar el cumplimiento de los requisitos se aporte el “certificado de los servicios sociales del órgano competente”) lo cierto es que en el cuerpo del



borrador de la norma sometida a consulta no se establece en ningún momento que haya de entregarse como documentación aneja a la solicitud el certificado de los servicios sociales competentes en relación con las circunstancias especiales que se contienen en el artículo 3.3 del proyecto de Real Decreto.

II

Como se ha comentado con anterioridad, el artículo 3 del borrador de Orden establece que cuando exista alguna de las circunstancias especiales que se prevén en el artículo 3.3 del proyecto de Real Decreto, dicho consumidor, en vez de aportar a la comercializadora de referencia directamente los documentos necesarios para que esta determine la concurrencia de los requisitos establecidos en la norma, habrá de aportar dicha documentación justificativa a los servicios sociales, los cuales emitirán un certificado de que dicho consumidor o alguien de su familia se encuentra en alguna de dichas circunstancias especiales del art. 3.3, pero sin reflejar de manera expresa en cuál de las circunstancias concretas se encuentra alguno de los integrantes de la unidad familiar ni qué miembro concreto de la misma es el que se encuentra en tal circunstancia.

Hay que recordar, tal y como resulta del Real Decreto y de la Orden sometida a consulta, e igualmente se hizo constar en el informe relativo al proyecto de Real Decreto que ya se ha mencionado, la base jurídica del tratamiento por parte de la comercializadora de referencia es el consentimiento del afectado, por lo que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD), y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), dicho consentimiento del interesado o de los miembros de la unidad familiar, que ha de obtenerse expresamente tal y como resulta de las normas sometidas a consulta, legitimarían el tratamiento por la comercializadora de referencia incluso de datos especialmente protegidos, como pueden ser los datos de salud (véase art. 7.3 LOPD). En consecuencia, habrá de ponderarse en la norma la conveniencia de un sistema como el sometido consulta en el cual la comercializadora de referencia, aun pudiendo ser responsable del tratamiento de datos de salud o especialmente protegidos, no puede conocer cuál de las circunstancias previstas en la norma se aplica ni tampoco en cuál de las personas en base a las que se solicita el régimen del Bono Social concurren dichas circunstancias especiales, lo que a su vez determina la imposibilidad para la comercializadora de referencia de impugnar u oponerse a la solicitud de Bono Social basada en la no concurrencia de dichas circunstancias especiales, puesto que no hay que olvidar en cualquier caso que el Bono Social es una prestación patrimonial de carácter público que la ley impone su financiación, en parte, a la propia matriz de la comercializadora de referencia.



Por otra parte podría parecer que el sistema citado es incongruente con lo establecido en el artículo 7.5 del proyecto de Real Decreto, que establece que en la solicitud del Bono Social tanto el titular del punto de suministro como los restantes miembros de la unidad familiar “darán su consentimiento expreso para que la comercializadora de referencia pueda recabar información de las administraciones autonómicas o locales cuyos servicios sociales estén atendiendo o vayan a atender al consumidor que cumpla los requisitos para ser vulnerable severo”, ya que este sistema establecido en el proyecto de Real Decreto permite que las comercializadoras de referencia puedan solicitar directamente de las administraciones autonómicas o locales la información necesaria para determinar directamente si el consumidor cumple con los requisitos establecidos en el propio Real Decreto. Por ello, lo establecido en el artículo 3, primer párrafo, última frase, podría entenderse que restringiría la posibilidad permitida en el Real Decreto, en el art. 7.5, a las comercializadoras de referencia para verificar directamente mediante la información solicitada y proporcionada por la administración autonómica o local competente, sin que se establezca en el Real Decreto restricción a la información que a tal respecto puedan pedir.

III

Como corolario de lo anterior cabe mencionar que en el artículo 6.1, párrafo tercero, del borrador de Orden parece circunscribirse la posibilidad del comercializador de referencia de rechazar la solicitud exclusivamente cuando existan discrepancias entre la información declarada en la solicitud y los datos que figuran en el libro de familia o en su caso en la certificación de la hoja individual del registro civil de cada uno de los integrantes de la unidad familiar o en el certificado de empadronamiento. Pero no cabe descartar que puedan existir discrepancias en cuanto al fondo de la cuestión, esto es, en cuanto a que en realidad no concurren en el interesado, o en algún miembro de su unidad familiar, los requisitos necesarios de fondo para la concesión del Bono Social. En estos casos no se prevé en la norma la posibilidad del comercializador de referencia de rechazar la solicitud. Es decir, el proyecto de Orden no determina vía alguna para que el comercializador, -o, cierto es, por el consumidor- puedan reaccionar ante una actuación administrativa, ya sea (I) de la administración local o autonómica mediante el certificado que prevé el art. 3, primer párrafo, o (II) ante la decisión administrativa por el Ministerio, a través de la aplicación telemática implementada a que hace referencia el artículo 6 del borrador de Orden, concretamente en su apartado 4, de que el consumidor cumple, -o no cumple-, los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable/vulnerable severo.